

Caso 12.585
Ángel Pacheco León y familia vs. Honduras
Observaciones finales escritas

I. INTRODUCCIÓN

1. El presente caso trata sobre la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por el asesinato de Ángel Pacheco León, el 23 de noviembre de 2001, en el marco de su campaña como diputado al Congreso Nacional de Honduras por el Partido Nacional. Asimismo, el caso se relaciona con la situación de impunidad en que permanecen tales hechos y la consecuente afectación a la integridad personal de sus familiares.

2. La afiliación del señor Pacheco León al Partido Nacional y su postulación como candidato, ocurrieron en un contexto de reformas constitucionales y electorales en Honduras, que dieron lugar a la implementación del denominado “voto preferente”, lo que significó un cambio en el sistema utilizado tradicionalmente por los partidos políticos para escoger a sus candidatos y candidatas. Bajo este nuevo sistema, el señor Ángel Pacheco León resultó ganador en las elecciones primarias del Partido Nacional como diputado al Congreso Nacional de Honduras en el departamento del Valle, por lo que figuraba como candidato a primer diputado para el período 2002-2006 en las elecciones que se realizarían el 25 de noviembre de 2001.

3. De acuerdo a múltiples testimonios, luego de ganar las elecciones primarias, el señor Pacheco León recibió una serie de amenazas, incluidas amenazas a su vida e integridad personal, que tenían por objeto hacer que desistiera de su candidatura y cediera el cargo al diputado suplente para ese momento, Raúl Pino Rodríguez; a lo cual el señor Pacheco se negó. Esta situación de presión e intimidación vino dirigida de parte de distintos actores políticos afiliados o relacionados con el Partido Nacional, incluyendo autoridades electas ya en función, es decir, agentes estatales.

4. El Estado hondureño ha argumentado que no es responsable por la violación del derecho a la vida en perjuicio de la víctima, porque no conoció de forma previa a su muerte, ninguna denuncia relacionada con las amenazas que había recibido. No obstante, la atribución de responsabilidad al Estado por la muerte del señor Pacheco León se sustenta en que, pese a la existencia de múltiples indicios de participación de agentes estatales y la existencia de un móvil político, éstos no han sido desvirtuados por el Estado a través de una investigación seria, efectiva e imparcial.

5. A la luz de lo anterior, y con base en la jurisprudencia de la Corte en este tipo de situaciones, la Comisión estableció que el Estado de Honduras es responsable por el incumplimiento del deber de respetar el derecho a la vida del señor Ángel Pacheco León. Asimismo, y en virtud del carácter selectivo de su asesinato vinculado con el ejercicio de su candidatura como diputado del Congreso Nacional, la CIDH también estableció la violación de los derechos políticos del señor Pacheco León.

6. Tal como fue indicado por la Comisión en su nota de remisión y en la audiencia pública, el presente caso fue sometido a la Corte Interamericana por la necesidad de obtención de

justicia y reparación frente al incumplimiento respecto de las recomendaciones del Informe de Fondo 49/15.

7. Asimismo, el presente caso plantea cuestiones de orden público interamericano. En particular, el presente caso permitirá a la Corte profundizar en su jurisprudencia sobre el contenido específico del deber de investigar violaciones del derecho a la vida, frente a asesinatos de carácter selectivo como consecuencia del ejercicio de derechos protegidos por la Convención Americana, incluyendo los derechos políticos. En la misma línea, y también como componente de la obligación de investigar con la debida diligencia este tipo de hechos, el caso permitirá a la Honorable Corte pronunciarse sobre los parámetros concretos que deben observarse a fin de diseñar y agotar líneas de investigación adecuadas para evitar que este tipo de casos queden en la impunidad, incluyendo la relevancia de seguir un modelo de análisis de contexto en la investigación de los hechos.

8. En estas observaciones finales la Comisión reitera las consideraciones de hecho y de derecho realizadas en su Informe de Fondo 49/15, en su nota de remisión del caso ante la Corte, así como lo indicado en la audiencia pública.

9. La Comisión formulará a continuación sus observaciones finales en tres grupos teniendo en cuenta los argumentos estatales planteados en la audiencia pública relacionados con: 1) la investigación de los hechos; 2) la atribución de responsabilidad por la violación del derecho a la vida y los derechos políticos; y 3) consideraciones sobre las reparaciones.

1. El deber de investigar con debida diligencia indicios de participación estatal en asesinatos de carácter selectivo

10. La Comisión se referirá primeramente a lo planteado por el Estado en sus argumentos orales en cuanto a que con base en el “modelo de investigación” utilizado para analizar la obligación de debida diligencia en el presente caso, no se le puede atribuir responsabilidad internacional, porque no era un “modelo” aplicable en la época de los hechos, sino que ha sido un desarrollo posterior de la jurisprudencia de la Corte.

11. Al respecto, la CIDH recuerda en primer lugar que la Corte ha señalado respecto de la obligación de investigar la violación de derechos humanos como la vida y la integridad personal, que la misma “está consagrada en la Convención Americana y no nace a partir de su aplicación e interpretación por [la] Corte en el ejercicio de su jurisdicción contenciosa, por lo cual debe ser respetada por los Estados Parte desde el momento en que ratifican dicho tratado”¹.

12. En segundo lugar, como lo señaló la Comisión durante la audiencia pública, el incumplimiento del deber de debida diligencia por la omisión en investigar ciertos elementos del contexto que rodearon las circunstancias en que ocurrieron los hechos, no se trata de una innovación de los estándares en la materia. En efecto, en casos como el de *Cepeda Vargas vs. Colombia*, que se refiere a hechos ocurridos en 1994, la Corte analizó el contexto en que fue ejecutado el asesinato del Senador Cepeda, y respecto del deber de investigar estableció que:

En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso

¹ Corte IDH. *Caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia*. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248, párr. 241.

sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

Como parte de la obligación de investigar ejecuciones extrajudiciales como la del presente caso, las autoridades estatales deben determinar procesalmente los patrones de actuación conjunta y todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades. No basta el conocimiento de la escena y circunstancias materiales del crimen, sino que resulta imprescindible analizar el conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron, diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente, así como de las personas o grupos que estaban interesados o se beneficiarían del crimen (beneficiarios). Esto puede permitir, a su vez, la generación de hipótesis y líneas de investigación; el análisis de documentos clasificados o reservados, y un análisis de la escena del crimen, testigos, y demás elementos probatorios, pero sin confiar totalmente en la eficacia de mecanismos técnicos como éstos para desarticular la complejidad del crimen, en tanto los mismos pueden resultar insuficientes. En consecuencia, no se trata sólo del análisis de un crimen de manera aislada, sino inserto en un contexto que proporcione los elementos necesarios para comprender su estructura de operación [Resaltados fuera del original]².

13. Este alcance de la obligación de investigación, fue reiterado por la Corte en el caso *Uzcátegui y otros vs. Venezuela* que se refiere a hechos también ocurridos en el año 2001³.

14. Al respecto, la Comisión también destaca lo señalado por el Estado en cuanto a que no serían aplicables precedentes como el de *Cepeda Vargas*, por tratarse de casos relacionados con un “patrón sistemático de hechos de violencia en contra de miembros de partidos políticos”. La Comisión considera que se trata de una interpretación imprecisa por parte del Estado, en tanto es claro que dichos estándares y la forma cómo han sido aplicados por la Corte en los casos citados, se refieren al análisis del contexto específico del caso, en el sentido de que una investigación aislada sobre este tipo de crímenes, sin tener en cuenta las posibles estructuras de poder implicadas en su planeación y ejecución, impacta directamente en su efectividad. Ello es independiente de que exista además un contexto más estructural o sistemático en el cual también se puedan enmarcar los hechos de un caso y que, conforme a la jurisprudencia de la Corte, en todo caso también debería tomarse en cuenta. La Comisión profundizará sobre este alegato del Estado también en la sección respectiva a la violación de derechos políticos.

15. Con base en lo anterior, la Comisión reitera que frente a los claros indicios de participación o colaboración directa e indirecta de agentes estatales en el asesinato del señor Pacheco León, los cuales surgieron desde las etapas iniciales de la investigación, el Estado tenía un deber reforzado de investigar con especial diligencia y seriedad estos hechos. En ese sentido, la Comisión considera que el peritaje rendido en audiencia por el perito Alejandro Ramelli ilustra muy claramente sobre cómo la ausencia de esta línea de investigación condujo a que la misma resultara ilusoria e inefectiva.

² Corte IDH. *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párrs. 118-119.

³ Corte IDH. *Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 249, párr. 222.

16. Como fue explicado durante la audiencia, se trata de la aplicación de los estándares sobre el deber de debida diligencia, desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, aplicados de manera directa para analizar la actuación del Estado hondureño con las características particulares del presente caso.

17. La Comisión retoma en particular lo explicado por el perito Ramelli en cuanto al alcance de la obligación de investigar con seriedad y de manera eficaz este tipo de indicios y de estructuras de poder. En ese sentido, son tres elementos principales los que deben ser tenidos en cuenta: i) el nexo material entre la actividad que desarrollaba la víctima y el crimen cometido; ii) la constatación de si hubo actos previos de hostigamientos y amenazas en contra de la víctima; y iii) que no se trata de una actuación de manera individualizada, sino que debe investigarse los posibles niveles de responsabilidad material e intelectual y si éstas forman una red o estructura de poder.

18. Como fue explicado por el perito Ramelli:

Una interacción entre una investigación forense y criminalística exhaustiva y adecuada, con una de naturaleza criminal adelantada en contexto, caracterizada por su carácter interdisciplinario y examen de organizaciones criminales, redes o estructuras de poder, conduce eficazmente a identificar y sancionar los autores materiales e intelectuales responsables por la comisión de un asesinato selectivo⁴.

19. Al respecto, la Comisión recuerda que si bien la obligación de investigación es de medios y no de resultado, deber ser asumida por el Estado como una obligación jurídica propia y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa⁵. Es justamente este elemento de la eficacia de la investigación frente al deber reforzado del Estado, el que cobra una especial relevancia en la actuación desplegada por las autoridades para investigar los hechos del presente caso, lo que como quedó acreditado tanto en el Informe de Fondo, durante la audiencia pública y en el marco del peritaje de Alejandro Ramelli, no fue cumplido por el Estado.

20. La importancia de que este tipo de crímenes sean investigados con una aproximación no tradicional, en el sentido que requiere la combinación de varias metodologías, incluyendo una investigación sobre el contexto en el cual se enmarca el delito, atiende al carácter selectivo del mismo. Así lo ha entendido la propia Corte Interamericana conforme a los estándares antes señalados, y que destacan precisamente que la ejecución de este tipo de crímenes requiere el funcionamiento de una estructura de operación que el Estado debe desentrañar a partir de una investigación seria y eficaz.

21. Como lo determinó la Comisión en el Informe de Fondo y fue señalado en la audiencia, la ausencia de líneas lógicas y oportunas de investigación sobre estos elementos del contexto en el cual se enmarcó el asesinato del señor Ángel Pacheco León, condujo a que si bien se han realizado ciertas diligencias en la investigación, el proceso no ha arrojado ningún resultado concreto, y el Estado no ha logrado desvirtuar estos serios indicios que comprometen la participación de agentes estatales. Al respecto, la Comisión destaca lo señalado por el perito Ramelli en cuanto a que, con base en los estándares sobre exhaustividad e idoneidad desarrollados por la Corte en materia de debida diligencia, el análisis sobre la actuación desplegada por el Estado no

⁴ Peritaje rendido por Alejandro Ramelli durante la audiencia pública del caso.

⁵ Corte I.D.H., *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 177; y *Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 131.

puede limitarse a si se practicaron distintas pruebas sin una seguir una línea clara de investigación, en tanto dicha obligación “no se limita simplemente a una actividad procesal ágil, sino [a que la misma] sea efectiva”.

22. En ese sentido, la CIDH reitera que en el presente caso desde la etapa inicial de la investigación y hasta la actualidad, la investigación interna descartó de manera casi absoluta el esclarecimiento de los múltiples indicios que apuntaban al carácter selectivo del asesinato y la participación directa e indirecta de agentes estatales. Ello pese a que las propias autoridades tuvieron conocimiento casi inmediato de los mismos. Como lo constató el informe de investigación del DGCI de 20 de diciembre de 2001, antes de su asesinato, el señor Pacheco había recibido en varias ocasiones amenazas de muerte, por parte de personas del mismo partido al cual pertenecía, mencionando a Raúl Pino, Benjamín Cárdenas y Salvador Cárdenas⁶. Otro elemento de igual gravedad que tampoco ha sido investigado con seriedad, es lo relativo al agente de policía considerado como el principal autor material del crimen, ni la posible relación con la patrulla de policía que se encontraba cerca de la escena del crimen y que no habría actuado al respecto.

23. Estas circunstancias eran suficientes para activar el deber reforzado del Estado, y desplegar una actividad investigativa que tuviera en cuenta todos los elementos descritos por el perito Ramelli en su presentación a la luz de los estándares internacionales en la materia. Por el contrario, el hecho que la investigación se concentrara inicialmente en tres personas, pese a lo declarado por el hijo del señor Pacheco León como único testigo presencial de los hechos, y no se considerara la información que vinculaba a agentes estatales, podría ser incluso considerado como un actuar deliberado en desviar la investigación. En ese sentido, el análisis realizado por el perito Ramelli sobre el expediente de la investigación interna, refleja que de haber desplegado una actividad investigativa que tuviera en cuenta todos estos elementos, se habrían logrado con una alta probabilidad, resultados concretos para lograr el esclarecimiento de los hechos. Como explicó el perito “no es que no existiera forma de investigarlo” sino que “a través de una investigación en contexto [se podían] construir todos los indicios de responsabilidad, estructuras de poder y funcionamiento de partidos políticos” y cómo ciertas reformas en materia electoral pudieron constituir “el detonante de la comisión del delito”.

24. Justamente, teniendo en cuenta que el asesinato de la víctima estuvo relacionado con la actividad que desempeñaba, en el ejercicio de un derecho protegido por la Convención, la Comisión considera importante que la Corte profundice su jurisprudencia sobre los elementos específicos que requieren ser tenidos en cuenta para materializar el deber de debida diligencia del Estado, cuando se trata de líderes políticos, y la necesidad de que el esclarecimiento sobre el móvil de dicha violación, incorpore elementos relativos a la coyuntura política, sea general y/o específica de la situación en la que se encontraba la víctima; y las estructuras vinculadas al ejercicio de sus derechos políticos. Como precisó el perito Ramelli durante la audiencia, si bien se trata de un análisis de contexto aplicado en general para crímenes sistémicos, también es aplicable en la investigación de delitos selectivos, porque no se puede limitar a las “técnicas tradicionales” como si se tratara de un delito común, sino que debe investigarse la estructura de poder que aparece mencionada, tal y como surgió en los distintos indicios recabados en la investigación del presente caso.

25. La Comisión se referirá a las consecuencias jurídicas de esta omisión del Estado en relación con las violaciones del derecho a la vida y los derechos políticos en la sección siguiente.

⁶ CIDH, Informe No. 49/15, Caso 12.585. Fondo, Ángel Pacheco León y familia, Honduras, 28 de julio de 2015, párr. 52.

26. Aunado a lo anterior, la Comisión también reitera que la existencia de actos de obstrucción de justicia, trabas o faltas de colaboración de las autoridades que hayan impedido o estén impidiendo el esclarecimiento de la causa, constituyen una violación al derecho a las garantías judiciales. Asimismo, la obligación de investigar y sancionar todo hecho que implique violación de los derechos protegidos por la Convención, incluyendo la autoría intelectual y posibles actos de encubrimiento, encuentra su fundamento en el derecho a la verdad de los familiares de la víctima, el cual implica obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios, así como el castigo de todas las personas responsables⁷, involucrando a toda institución estatal⁸.

27. En ese sentido, para la Comisión es importante que la Honorable Corte tenga en cuenta igualmente que en el presente caso se verificaron distintas falencias en la investigación, que constituyeron a su vez violaciones a los derechos a las garantías y protección judiciales en perjuicio de los familiares del señor Ángel Pacheco León. Es decir, como fue establecido en el Informe de Fondo y lo explicó igualmente el perito Ramelli, ni siquiera bajo el modelo de investigación centrado únicamente en el hecho de manera aislada, se cumplieron con estándares mínimos de debida diligencia relacionados con el manejo de la escena del crimen, la práctica de pruebas esenciales como la autopsia y la cadena de custodia de la evidencia. Asimismo, la Comisión constató como otro de los obstáculos dentro de la investigación, que durante la misma surgió información sobre posibles hechos de represalia y presión respecto de personas que participaron en la investigación, respecto a los cuales el Estado no investigó su posible vinculación con el proceso y las acciones de justicia que estaban realizando, ni adoptó medidas de protección a favor de las personas cuya situación de seguridad se vio afectada⁹. Finalmente, la CIDH determinó que la demora en los procesos internos resultó injustificada y por lo tanto una violación al principio de plazo razonable. De acuerdo con la información disponible, la situación de impunidad total en el caso se mantiene hasta la actualidad.

2. La atribución de responsabilidad por la violación del derecho a la vida y los derechos políticos del señor Ángel Pacheco León

28. Teniendo en cuenta los alegatos del Estado durante la audiencia, la Comisión reitera que la metodología utilizada para analizar la responsabilidad internacional del Estado en el presente caso no se refiere al deber de prevención, sino que la CIDH analizó la responsabilidad directa del Estado por la violación del derecho a la vida en perjuicio del señor Ángel Pacheco León.

29. Al respecto, la CIDH recuerda lo reiterado por la Corte en cuanto que la falta de investigación de alegadas afectaciones cometidas a una persona cuando existen indicios de participación de agentes estatales, “impide que el Estado presente una explicación satisfactoria y convincente de los [hechos] alegados y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad,

⁷ Corte I.D.H., *Caso Gómez Palomino Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 78; *Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 150; y *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C. No. 163, párr. 147.

⁸ Corte I.D.H., *Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 130; *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 120; y *Caso Huilca Tecse Vs. Perú*. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 66.

⁹ CIDH, Informe No. 49/15, Caso 12.585. Fondo, Ángel Pacheco León y familia, Honduras, 28 de julio de 2015, párrs. 107-108.

mediante elementos probatorios adecuados”¹⁰. De esta forma, la Corte ha entendido dicha falta de esclarecimiento como un factor a tomar en cuenta para acreditar la alegada afectación y la consecuente responsabilidad internacional¹¹.

30. Aunado a lo anterior y conforme a lo estándares descritos en la sección previa, frente a los indicios de participación de agentes estatales en el asesinato de la víctima, recae sobre el Estado el deber reforzado de efectuar una investigación minuciosa, seria y diligente para determinar la veracidad o desvirtuar indicios de esta naturaleza. Como ya ha sido ampliamente argumentado, el Estado incumplió dicha obligación, lo que tiene como consecuencia jurídica la atribución directa de responsabilidad internacional por el incumplimiento del deber de respetar la vida del señor Ángel Pacheco León, y con ello la violación del artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento.

31. Como fue señalado durante la audiencia pública, se trata en particular de la aplicación del estándar desarrollado por la Corte en casos como *Kawas Fernández vs. Honduras*, en los cuales la Corte ha otorgado valor probatorio a este tipo de indicios. En palabras de la Corte “concluir lo contrario implicaría permitir al Estado ampararse en la negligencia e ineffectividad de la investigación penal para sustraerse de su responsabilidad por la violación del artículo 4.1 de la Convención”¹².

32. En relación con la violación de los derechos políticos, la Comisión reitera que la interpretación que sostuvo el Estado durante la audiencia respecto del artículo 23 de la Convención, se trataría solamente de la protección para las personas que ya se encuentran en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, la Convención Americana prevé un ámbito de protección más amplio, incluyendo el derecho de las personas a ser elegidas en elecciones periódicas auténticas realizadas conforme a lo previsto en el artículo 23.1.b) de dicho instrumento. Asimismo, el Estado planteó que no sería responsable por la violación del artículo 23 porque a diferencia de casos como *López Mendoza vs. Venezuela*, porque en ningún momento limitó o intervino para impedir la participación del señor Ángel Pacheco como candidato a diputado. La Comisión considera que no es necesario ahondar sobre este punto, en tanto es claro que no son los supuestos fácticos sobre los cuales se alega la violación de los derechos políticos.

33. Asimismo, la Comisión observa que el Estado argumentó por una parte que no serían aplicables ciertos precedentes como el de *Cepeda Vargas vs. Colombia* y *Chitay Nech y otros vs. Guatemala*, porque el presente caso no se relaciona con un “patrón sistemático de hechos de violencia en contra de miembros de partidos políticos”. Por otra parte, el Estado solicitó a la Corte que mantuviera su línea jurisprudencial en los casos *Bámaca Velásquez vs. Guatemala*, *La Cantuta vs. Perú* y *Escuá Zapata vs. Colombia* y declarar que no ha incurrido en una violación al artículo 23 de la Convención Americana. El Estado también planteó que si el móvil del asesinato del señor Ángel Pacheco León hubiese sido de carácter político, la organización política a la cual pertenecía no hubiese postulado a su hermano José Pacheco con posterioridad a su muerte.

¹⁰ Corte I.D.H., Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 353.

¹¹ Corte I.D.H., Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 354.

¹² Corte I.D.H., *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 97.

34. Al respecto, la Comisión considera importante hacer varias precisiones. En primer lugar, la CIDH reitera que lo discutido sobre la falta de investigación del contexto en que se produjo el asesinato del señor Ángel Pacheco, se refiere a la naturaleza y alcance de dicha obligación en casos como el presente. Ello puede referirse, según las circunstancias particulares de cada caso, a la necesidad de tener en cuenta elementos del contexto general o específico de los hechos, y atendiendo también a la naturaleza del móvil que se presume se perseguía, esto es, relacionado con el ejercicio de ciertos derechos. Siendo que en este caso se trató del ejercicio de derechos políticos, la Comisión presentó un peritaje en los términos descritos precisamente por tratarse de un tema que trasciende a las víctimas del presente caso, y se relaciona con cuestiones que la Corte puede profundizar en su jurisprudencia sobre el deber de debida diligencia de este tipo de hechos violentos y los parámetros que se deben seguir para evitar que queden en impunidad. Ello puede contribuir a que los operadores de justicia puedan seguir estos criterios, y lograr un tratamiento más efectivo contra la impunidad de estos casos.

35. En ese sentido, resulta ilustrativo lo afirmado por el Estado en la audiencia pública en cuanto a que la información sobre los hechos previos a la muerte del señor Ángel Pacheco, debería entenderse “como controversias de tipo político” y no como un “medio [necesario] para la ejecución de la víctima”. El Estado afirmó asimismo que “no existen elementos probatorios que permitiesen” arribar a dicha conclusión.

36. Al respecto, la CIDH destaca que en tanto a la fecha no se ha logrado un esclarecimiento de los hechos, ni se ha desplegado una actuación diligente que tenga en cuenta todos los elementos analizados, no resultan ajustadas a la evidencia disponible, las afirmaciones del Estado que descartan anticipadamente que el asesinato del señor Pacheco León estuvo relacionado con violencia de carácter político, o que apuntan a que no hay elementos que permitan verificar tales circunstancias. Precisamente se trata de uno de los elementos que el Estado no ha logrado desvirtuar por incumplir su deber de investigar adecuadamente y de manera efectiva.

37. En segundo lugar, en relación con los precedentes que el Estado considera que deben ser aplicados en el presente caso, en particular el caso *Escué Zapata vs. Colombia*, si bien el Estado no precisó el fundamento de su argumento, la CIDH recuerda que en dicho caso la Corte no consideró suficientemente acreditado que el objetivo del ejecutar al señor German Escué Zapata haya sido por el liderazgo que tenía dentro de su comunidad, ni que dicho crimen se inscribía en una situación de contexto general de violencia contra los derechos humanos de los pueblos indígenas del departamento del Cauca¹³. Asimismo, el alegato planteado a la Corte en dicho caso sobre la violación del artículo 23.1 de la Convención se basaba principalmente en que la muerte de la víctima le impidió lógicamente ejercer su “autoridad de gobierno indígena”. De esta forma, la Corte determinó que no se habían indicado hechos que permitieran establecer la vulneración del contenido jurídico específico del artículo 23¹⁴.

38. La Comisión considera que los fundamentos fácticos del presente caso son sustancialmente diferentes, y como se ha señalado reiteradamente, existen suficientes elementos que acreditan el carácter selectivo del asesinato del señor Ángel Pacheco, y que el mismo estuvo directamente relacionado con su candidatura como diputado al Congreso Nacional, lo cual constituía el ejercicio de un derecho establecido en la Convención Americana. Ello aunado a los

¹³ Corte IDH. *Caso Escué Zapata Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párrs. 63-64.

¹⁴ Corte IDH. *Caso Escué Zapata Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 122.

indicios de participación de agentes estatales que el Estado no logró desvirtuar. En particular, se destaca la opinión del perito Ramelli en su calidad de experto, en cuanto a que de un análisis minucioso que realizó de la información que consta en el expediente, se desprende que ni siquiera se plantean otras posibles líneas de investigación que fuera necesario seguir o descartar, sino que resulta claro el móvil político del homicidio y el posible involucramiento de estructuras políticas de poder. En ese sentido, la Comisión determinó en el Informe de Fondo que la información surgida durante la investigación permitía inferir la participación en los hechos que rodearon el asesinato de la víctima, de al menos cuatro agentes estatales, incluyendo un alcalde, dos diputados y un agente policial¹⁵.

39. En otros asuntos que sí guardan una similitud con la base fáctica del presente caso, la Corte en efecto ha entendido que cuando la violación del derecho a la vida es consecuencia del ejercicio de un derecho protegido por la Convención, esto produce a su vez una violación de dicho derecho¹⁶. Por lo tanto, la CIDH considera que en la misma línea de análisis respecto del derecho a la vida, la falta de seguimiento a las líneas de investigación relacionadas con este móvil, que a su vez involucraba a agentes estatales, tiene efectos en el análisis de la responsabilidad del Estado respecto de los derechos políticos, y permite establecer la violación del artículo 23 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de Ángel Pacheco León.

40. En tercer lugar, y en cuanto al alegato del Estado sobre cómo interpretar el hecho de que el hermano de la víctima hubiese sido postulado como diputado después de su muerte, la Comisión considera que se trata de una afirmación del Estado que no encuentra sustento en la evidencia disponible ni en la aplicación de los estándares internacionales respectivos. Al respecto, la Comisión considera especialmente relevante el testimonio del señor José Pacheco León durante la audiencia, en el cual detalló entre otros aspectos, la exigencia de que las comisiones municipales electorales y otros actores le realizaron a las autoridades del partido y al candidato presidencial del momento, para que no fuera nombrado el candidato suplente, sino que se nombrara a un miembro de la familia del señor Pacheco León, en vista de la indignación que había causado su asesinato y el liderazgo que tenía para ese momento.

3. Consideraciones sobre las reparaciones

41. La Comisión observa que durante la audiencia pública, el Estado planteó que a los efectos de la reparación del daño, la Corte diferenciara el nivel de afectación causada por la muerte del señor Ángel Pacheco León entre sus familiares, en particular, sus hermanos y hermanas según si tenían una relación cercana a la víctima o no, planteando que incluso algunos no debían ser considerados como víctimas del caso.

42. Al respecto, la Comisión reitera que en el presente caso declaró las violaciones de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de los siguientes familiares de Ángel Pacheco León su madre Andrea Pacheco; ii) su esposa Blanca Rosa Herrera; iii) sus hermanos y hermanas Otilia, Concepción, José, Blanca, María, Francisco, Norma,

¹⁵ CIDH, Informe No. 49/15, Caso 12.585. Fondo, Ángel Pacheco León y familia, Honduras, 28 de julio de 2015, párr. 145.

¹⁶ En el caso *Huilca Tecse* respecto del derecho a la libertad de asociación la Corte consideró que:

[...] en el presente caso, el ejercicio legítimo que hizo el señor Pedro Huilca Tecse del derecho a la libertad de asociación, en materia sindical, le provocó una represalia fatal, que a su vez consumó una violación en su perjuicio del artículo 16 de la Convención Americana.

Corte IDH. Caso *Huilca Tecse Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr.

Marleny, Jamileth, Jaqueline y Jorge, todos de apellido Pacheco; iv) sus hijos e hijas Jimmy Pacheco, Miguel Ángel Pacheco; Cinthia Pacheco Devicente, Miguel Pacheco Devicente, Tania Pacheco López, Juan Pacheco Euceda y Bianca Pacheco Herrera.

43. En vista de lo anterior y con base en los alegatos de hecho y de derecho planteados en el presente caso, la Comisión solicita a la Honorable Corte que ordene al Estado reparar integralmente las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material y moral; y que disponga medidas de reparación adecuadas para sus familiares con base en los estándares y criterios desarrollados por la Corte en la materia.

Washington DC.

24 de abril de 2017